

C.A. de Santiago

Santiago, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno.

VISTO:

En estos autos sobre juicio sumario de indemnización de perjuicios, Rol C-41057-2018, del 2° Juzgado Civil de esta ciudad, caratulados “Sánchez con Bökamp”, por sentencia de veintinueve de mayo de dos mil veinte, se acogió la demanda solo en cuanto se condenó a la demandada a pagar a los actores por concepto de daño moral, las sumas que en ella se señalan, con costas de la causa.

Se alzó la parte demandada, interponiendo recurso de casación en la forma y en conjunto, recurso de apelación, adhiriéndose a este último la demandante.

Asimismo, se acumuló a estos antecedentes la apelación que dedujo la demandada en contra de la resolución que recibió la causa a prueba.

Se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

I. EN CUANTO AL RECURSO DE CASACIÓN EN LA FORMA:

1°.- Que el demandado sostiene que la sentencia cuestionada incurrió en los defectos formales contemplados en el artículo 768 N° 5 y 9 del Código de Procedimiento Civil; el primero, en relación a los numerales 3 y 6 del artículo 170 del mismo código. En efecto, explica que en la audiencia testimonial de fecha 1 de octubre del año 2019, la actora materializó la comparecencia de cinco testigos (Yasna Alejandra Collihuin Dinamarca, Jaime Antonio Henríquez González, Yeimi Rivas Velasco, Leonor Sandoval Vaca y Rosa Machuca Orellana), según se lee de las actas respectivas (folios 41 y 42). En este contexto, su parte tachó a cuatro de esos cinco deponentes; incidencias que fueron dejadas para resolver en definitiva. Sin embargo, el tribunal omitió pronunciarse respecto de tres de las objeciones formuladas, argumentando y rechazando solo una de ellas (Yasna Alejandra Collihuin Dinamarca), sin resolver aquellas que dedujo respecto de Yeimi Rivas, Leonor Sandoval y Rosa Machuca. Esta omisión



constituye una vulneración a lo preceptuado en el numeral 5° (sic) del artículo 170 citado.

Además, advierta que este no es el único defecto de que adolece el fallo rebatido, desde que su parte opuso la excepción de exposición temeraria al daño o compensación de culpa, sin que el juez *a quo* emitiera pronunciamiento sobre ella.

Por otro lado, omitió la recepción y consideración de prueba oportuna y legalmente decretada, privándola de “producir prueba relevante que fundaba su teoría del caso, la excepción de exposición temeraria al peligro y la que demostraría las faltas en la conducción que había cometido la parte demandante y víctima, que excluyen o al menos morigeran la responsabilidad de mi representada”. Así, con fecha 11 de diciembre del año 2019, mediante resolución rolante a folio 52, el juez de primer grado ordenó oficiar al Cuerpo de Bomberos Superintendencia Central a fin de que dicha entidad remitiese el informe elaborado a raíz del accidente, así como la atención prestada a la demandante. Tal oficio fue debidamente diligenciado el 23 de enero, acompañándose la documentación que así lo acreditaba. Si bien es cierto que a la época de la dictación de la sentencia aun no era recibido el oficio mencionado, existieron gestiones de ambas partes, judicial y extrajudicial, para que dicha entidad lo incorporase. Finalmente, el tribunal prescindió del mismo sin siquiera hacer referencia a aquella situación al momento de fallar, aun cuando ese antecedente pudiese haber dado cuenta de circunstancias que hubiesen permitido librar de responsabilidad civil a su parte.

Finalmente, quedó pendiente la realización de la audiencia de absolución de posiciones solicitada respecto del curador de doña Sandra Durán, don Melquiz Rivas Joven, al tenor del pliego acompañado dentro de plazo. Relativo a lo anterior, es de público conocimiento que existe una emergencia sanitaria provocada por la propagación del virus Covid-19, que ha impedido se lleven a cabo todo tipo de audiencias. Por ello, su parte intentó por todos los medios conseguir un receptor judicial a quien encargar tal diligencia, lo que resultó, privándola de rendir la prueba solicitada en la oportunidad procesal correspondiente.



Termina señalando que al omitir el juez *a quo* trámites esenciales derivados de la prueba que no se le permitió rendir en el curso de los meses de marzo y abril del presente año, importó despojarla de elementos relevantes, afectando el principio de bilateralidad de la audiencia y, con ello, la validez del proceso judicial en su esencia.

2°.- Que en lo tocante a la causal del numeral 5° del artículo 768 del Código de Enjuiciamiento Civil, vinculado a los numerales 3 y 6 del artículo 170 de esa reglamentación, yerra el abogado de la demandada al sustentar este defecto en lo que dice relación al numeral 3°, pues a este respecto nada se indicó en el recurso escrito, en tanto si se entiende que el fallo no se pronunció sobre la enunciación de las excepciones o defensas alegadas por el demandado, de la lectura del mismo, aparece que este realizó un relato resumido de la totalidad de la controversia planteada en estos autos, incluyendo ciertamente las alegaciones que en su oportunidad formuló dicha parte.

En aquello que se vincula a la ausencia de la decisión del asunto controvertido, ha de señalarse que el tribunal se pronunció sobre la alegación de exposición imprudente al daño, justamente como una argumentación de fondo, desestimada por el juzgador tal como se desprende del motivo 5° en el que centra la controversia a la luz de las defensas del demandado y su posterior decisión sobre esos puntos en los basamentos siguientes, que terminan por desestimar aquella tesis, que perseguía aminorar la cuantificación del daño sufrido por los actores e incluso excluirlo.

3°.- Que sobre la ausencia de pronunciamiento sobre la totalidad de las tachas que dedujo el demandado, debe precisarse que esta materia no forma parte del fallo definitivo y, por ende, no tiene el carácter de sentencia definitiva o interlocutoria que ponga término al juicio o haga imposible su continuación, que son aquellas resoluciones judiciales susceptibles de ser impugnadas por esta vía extraordinaria, al tenor de lo dispuesto en el artículo 766 del Código de Procedimiento Civil, razón por la cual en este punto también corresponde el rechazo del presente arbitrio.



4°.- Que sin perjuicio de lo dicho, ninguna incidencia tiene lo depuesto por los testigos cuyas tachas no resultaron resueltas por el juez de primer grado en lo resolutivo de la sentencia, en tanto sus declaraciones no fueron consideradas para los efectos de acoger la acción, lo que evidencia que tal omisión, que resulta efectiva, no tiene transcendencia de ningún tipo para lo que viene dictaminado, a pesar de que ello, puede además subsanarse vía apelación, conforme a las facultades que posee esta Corte.

5°.- Que baste para desestimar la configuración de la causal del numeral 9° del citado artículo 768 del Código de Procedimiento Civil, señalar que sobre este supuesto defecto, no existe un razonamiento que se postule en el recurso, no obstante tratarse de uno de derecho estricto, que por lo mismo exige la singularización precisa de los antecedentes en que se funda y su configuración, a lo que se añade, con igual relevancia, la circunstancia de que nada se dijo por el recurrente de qué trámite esencial se trata, mediante la precisa vinculación del artículo 768 N° 9 [“En haberse faltado a algún trámite o diligencia declarados esenciales por la ley o a cualquier otro requisito por cuyo defecto las leyes prevengan expresamente que hay nulidad”] con aquellos que el mismo código califica como tales, de acuerdo al artículo 795 [“En general, son trámites o diligencias esenciales en la primera o en la única instancia en los juicios de mayor o de menor cuantía y en los juicios especiales: 1°. El emplazamiento de las partes en la forma prescrita por la ley; 2°. El llamado a las partes a conciliación, en los casos en que corresponda conforme a la ley; 3°. El recibimiento de la causa a prueba cuando proceda con arreglo a la ley; 4°. La práctica de diligencias probatorias cuya omisión podría producir indefensión; 5°. La agregación de los instrumentos presentados oportunamente por las partes, con citación o bajo el apercibimiento legal que corresponda respecto de aquélla contra la cual se presentan; 6°. La citación para alguna diligencia de prueba; y 7°. La citación para oír sentencia definitiva, salvo que la ley no establezca este trámite”] Luego, no puede pretender el postulante de la sanción que sea esta Corte la que



complete su alegación, encuadrándola en alguna de las hipótesis de la aludida norma.

6°.- Que a mayor abundamiento, y subsidiando el arbitrio en examen, aun cuando pudiera entenderse que aquello omitido se vincula con el N° 4 del artículo 795, pues no se agregó un oficio solicitado al Cuerpo de Bomberos Superintendencia Central y se impidió la rendición de la prueba confesional solicitada por el demandado, la decisión de rechazo de este acápite del mismo se mantiene inalterable, desde que, en primer lugar, era de su carga la tramitación del oficio en cuestión, despachado oportunamente por el tribunal, que incluso pudo incorporar en segunda instancia y, por otro lado, en relación a la confesional de parte, esta diligencia se llevó a efecto ante esta Corte, tal como lo prevé el Código de Procedimiento Civil, así que ninguna afectación puede prodigarse por el demandado en relación a ella.

7°.- Que como corolario de lo que se viene diciendo, solo resta desestimar la nulidad formal en todos sus extremos.

II.- EN CUANTO AL RECURSO DE APELACIÓN Y ADHESIÓN A LA MISMA:

Se reproduce la sentencia en alzada.

Y se tiene además presente:

8°.- Que la parte demandada tachó a los testigos Yeimi Rivas Velasco, Leonor Sandoval Vaco y Rosa Machuca Orellana, presentados por la actora, fundado en todos los casos en lo dispuesto en el numeral 7° del artículo 358 del Código de Procedimiento Civil, aseverando que entre los deponentes y la parte que los trajo a juicio existe amistad, sin embargo, tal afirmación de la perdidosa avizora el destino de la misma, en tanto no fue capaz de configurar en sus alegatos ni menos demostrar en los dichos de los testigos, el carácter que esa relación de amistad requiere para configurar una inhabilidad ni mucho menos la manifestación en los términos que se exige, lo que impone el rechazo de esta incidencia.

9°.- Que del recurso de apelación de la demandada, es posible concluir que pretende a través del mismo, la revocación del fallo sobre la base de argumentar la ausencia de prueba suficiente que permita



establecer la responsabilidad de su parte, pues entiende que la sentencia penal no es categórica en cuanto a la misma, cuestionando la prueba que allí se rindió y en particular su mérito, poniendo de relieve que la afectada conducía sin su licencia de conducir, a exceso de velocidad y sin focos nocturnos, lo que permite sostener, a su juicio, que no se encuentran demostrados los presupuestos de la acción, conforme se estableció en la resolución que recibió la causa a prueba, a lo que añade que de aquellas piezas probatorias es posible concluir la exposición imprudente al daño por parte de la actora.

Esta misma falencia probatoria la observa el apelante respecto de la fijación del daño moral.

10°.- Que, como lo señala el juez *a quo*, el punto de partida de cualquier análisis es la existencia irrefutable de una sentencia condenatoria, que impuso a la demandada de estos autos la pena de sesenta días de prisión en su grado máximo, más multa, suspensión de su licencia de conducir y accesorias, como autora del cuasidelito de lesiones graves previsto en los artículos 492 y 490 N° 2 del Código Penal, perpetrado el 31 de mayo de 2016 en la comuna de Vitacura, en perjuicio de doña Sandra Durán Bustamante. Por ello, cabía considerar la regla contenida en el artículo 178 del Código de Procedimiento Civil, tal como se razonó en el fallo cuestionado, en virtud de la cual en los juicios civiles podrán hacerse valer las sentencias dictadas en un proceso criminal siempre que condenen al imputado. Sobre ello, el profesor Barros advierte que frente a una sentencia penal condenatoria “no puede el juez civil poner en duda la existencia del hecho que constituye el delito, ni la culpa del condenado”. (Barros Bourie, Enrique. Tratado de responsabilidad extracontractual, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, p. 963).

En consecuencia, las sentencias condenatorias en materia criminal producirán efecto de cosa juzgada en los juicios civiles, lo que implica que al juez en esta última sede le está proscrito concluir que determinada conducta no es ilícita si se ha declarado que ella constituye un delito penal; de manera que en aquella judicatura -civil- la actividad estará encaminada



a determinar si concurren el resto de los elementos de la responsabilidad, especialmente el relacionado con la prueba del daño.

Aquí cobra relevancia el fundamento principal del recurso del demandado, pues en último término pretende se desconozcan los hechos que se tuvieron por asentados y acreditados en sede penal, y que formaron parte de la descripción del hecho típico constitutivo del delito, olvidando que ello resulta imposible al tenor del artículo 180 del cuerpo de leyes citado, que dispone que “Siempre que la sentencia criminal produzca cosa juzgada en el juicio civil, no será lícito en éste tomar en consideración pruebas o alegaciones incompatibles con lo resuelto en dicha sentencia o con los hechos que le sirvan de necesario fundamento”. Ergo, aquellos hechos no pueden ser alterados en sede civil, lo que conlleva que se encuentran demostrados con el solo mérito de la sentencia condenatoria, sin que puedan aquellos ser objeto de prueba que pretenda desvirtuarlos.

11°.- Que en este sentido, el fallo penal, en su motivo 7°, después de examinar la prueba, según se consigna en el raciocinio 6° -reproducido, en parte por el juez *a quo*- señaló que tuvo por acreditado el siguiente hecho: “El día 31 de mayo 2016, entre las 18:20 y 18:30 horas aproximadamente, la requerida SABINE BOKAM, conducía el vehículo Station Wagon, marca Jeep, placa patente BWBR-74 por la calzada derecha de calle Las Hualtatas hacia el oriente a una velocidad no determinada. En esas circunstancias, en la intersección con la calle Nuestra Señora del Rosario en la comuna de Vitacura, en un cruce regulado por semáforo, realizó una maniobra de viraje a la izquierda reglamentariamente permitida con el fin de converger al flujo vehicular de esta arteria, sin advertir la presencia y proximidad de la motocicleta marca Loncin, placa patente OK-0531, conducida por Sandra Milena Duran Bustamante por el lado derecho de la calzada de Las Hualtatas en dirección al poniente a una velocidad no determinada. Al realizar el viraje a la izquierda, la imputada obstruyó la normal circulación del vehículo de esta última, acción que causó la colisión frontal de la motocicleta con el costado derecho la estructura del vehículo Station Wagon, provocando el volcamiento y arrastre de la motocicleta, y



la proyección del cuerpo de la víctima a una distancia de aproximados dos o tres metros, lugar en el que impactó contra el pavimento.

A consecuencia de la colisión, la víctima, Sandra Milena Duran Bustamante, resultó con lesiones de carácter grave atribuibles o secundarias a accidente de tránsito que requirieron tratamientos quirúrgicos y de neuro rehabilitación. Mantiene secuelas en la cognición y marcha de tipo invalidante, con trastornos conductuales asociados.

Que, la acción de viraje a la izquierda ejecutada por mera imprudencia contravino la regla prevista en el artículo 134 de la Ley de Tránsito que obliga a respetar el derecho preferente de paso de vehículos y peatones. Al proseguir la marcha, careciendo de preferencia, causó el accidente que provocó en la víctima lesiones de carácter grave.

El hecho previamente establecido, constitutivo de la contravención reglamentaria recién señalada, tipifica el cuasidelito descrito en el artículo 492 del Código Penal y sancionado en el artículo 492 N° 2 del mismo cuerpo legal.

En el mismo la imputada tuvo una participación de autora, pues ejecutó la conducta prevista en el tipo penal y dada su naturaleza de cuasidelito, se encuentra en grado de ejecución de consumado”.

12°.- Que de este modo, enfrentado el hecho inmodificable con aquellas alegaciones del demandado en su recurso, es fácil advertir que pretende desconocer la dinámica del accidente que el fallo penal asienta, buscando introducir una conducción descuidada de la víctima (sin permiso, sin focos, a exceso de velocidad) y la concurrencia de su culpa en la dinámica del siniestro, lo que por lo demás también fue planteada en sede penal, según se lee de ese fallo y del escrito de apelación, empero, todas aquellas hipótesis se abstraen de realidad procesal que emana del alcance del mencionado efecto que la sentencia penal produce en sede civil.

13°.- Que a mayor abundamiento, la demandada tampoco rindió prueba idónea con la finalidad de incorporar este antecedente de hecho que permita entender que la conducta de la víctima puede incluirse en la hipótesis del artículo 2330 del Código Civil, desde que el documento denominado informe técnico, que estudia la dinámica de la colisión y las



variables del accidente, no se trata de un peritaje, sino simplemente de la opinión de un tercero, pero sin la comprobación del rigor técnico que se requiere, postulando una teoría que se aparta de aquella prueba legalmente rendida y sopesada en el proceso penal y de las conclusiones a las que en esa sede se arribó, más cuando se trata de un documento en lengua extranjera, sin la correspondiente traducción oficial que se exige; en cuanto a la declaración jurada de un funcionario de carabineros, sobre ella, se hizo efectivo un apercebimiento, de manera tal que se tuvo por no presentado tal documento, que en todo caso carecía por su naturaleza de la idoneidad de una prueba para construir el presupuesto fáctico necesario.

14°.- Que ya despejado el primer asunto que propone el recurso, sobre el monto fijado a título de daño moral en la sentencia que se revisa, se endilga a esta una falta de razonamiento con el objeto de establecer el *quantum* indemnizatorio, como si se tratara de un recurso de casación en la forma, sin embargo, olvida el recurrente que a este respecto fueron cuatro los testigos que comparecieron a estrados a deponer sobre este punto, en que uno de ellos, el señor Henríquez, profundizó a raíz de su profesión, sobre los daños sufridos por los actores, concordante con lo expuesto por el resto de los mismos, por lo que solo cabe compartir, también, a este respecto, el razonamiento del magistrado.

15°.- Que la prueba que produjo el demandado en segunda instancia en nada altera lo resuelto, desde que la confesional del actor Rivas Joven no hizo sino reforzar las conclusiones a las que arribó el fallo en cuestión, sin que el deponente aportara algún antecedente en beneficio del peticionario de la diligencia.

16°.- Que respecto del recurso de adhesión de la parte demandante, es suficiente para desestimar la pretensión de resarcir el daño material que se reclama, lo razonado por el juez *a quo*, en cuanto a que la señora Durán Bustamante no es titular del derecho que persigue respecto del valor de la motocicleta, considerando la forma en que fue deducida la demanda y que a través del recurso de apelación se pretende modificar, lo



que también resulta aplicable al valor del casco, pues a su respecto no se demostró un efectivo daño a su patrimonio específico.

III.- EN CUANTO A LA APELACIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE RECIBIÓ LA CAUSA A PRUEBA:

17°.- Que la aludida determinación refleja plenamente la controversia suscitada en autos, de manera que los argumentos del apelante no permiten hacer variar lo resuelto.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 186 y siguientes, 764, 766 y 768, todos del Código de Procedimiento Civil, se resuelve que:

I.- **Se rechaza** el recurso de casación en la forma deducido por el demandado en contra de la sentencia de veintinueve de mayo de dos mil veinte, dictada por el Segundo Juzgado Civil de esta ciudad;

II.- Se rechazan las tachas opuestas por el demandado respecto de los testigos Yeimi Rivas Velasco, Leonor Sandoval Vaco y Rosa Machuca Orellana.

III.- **Se confirman**, en lo apelado, la aludida sentencia, así como también la resolución de dieciocho de marzo de dos mil diecinueve, que recibió la causa a prueba.

Regístrese, comuníquese y devuélvase.

Redacción de la ministra Lilian Leyton Varela.

N°Civil-13440-2019.

Pronunciada por la **Séptima Sala** de la Itma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Lilian Leyton Varela e integrada por la Ministro (S) señora Lidia Poza Matus y por el Abogado Integrante señor Jorge Norambuena Hernández. No firma la Ministra señora Leyton por encontrarse ausente.



Pronunciado por la Séptima Sala de la C.A. de Santiago integrada por Ministra Suplente Lidia Poza M. y Abogado Integrante Jorge Norambuena H. Santiago, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

